



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Radicación: 05001-31-05-019-2014-00980-02
Demandante: Francisco Octavio Barrera Jiménez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Asunto: Apelación auto
Procedencia: Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Tema: Pago

Medellín, febrero veintidós (22) de dos mil veinticuatro (2024)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDON y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 y aprobado el proyecto propuesto por la ponente, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, respecto del auto proferido el 19 de enero de 2024, por medio del cual se declaró probado el pago total de la obligación, dentro del proceso ejecutivo conexo instaurado por el señor Francisco Octavio Barrera Jiménez en contra de la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. Radicado 05001-31-05-019-2014-00980-02.

1.- ANTECEDENTES

El señor Francisco Octavio Barrera Jiménez, por conducto de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva laboral, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, pretendiendo se libre mandamiento de pago por la suma de \$97.804.155.44, más las mesadas que se causen durante el trámite del proceso, además del pago de la indexación. (doc.01, carp.01)

El Juzgado Tercero Laboral de Descongestión para Procesos Ejecutivos de Medellín, mediante auto proferido el 17 de junio de 2015 libró mandamiento de pago en favor del ejecutante y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por la suma de \$68.260.411 por concepto de retroactivo pensional conformado por el reajuste pensional reconocido en la Resolución RDP 056050 del 11 de diciembre de 2013, calculado a partir del 04 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2015; por el retroactivo pensional reconocido en la Resolución RDP 056050 de 2013, que se conforme a partir del 1º de junio de 2015 y hasta la fecha del pago de la obligación (págs. 31-36, doc.01, carp01)

Posteriormente, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 06 de septiembre de 2019, declaró no probadas las excepciones propuestas por la UGPP, y ordenó continuar adelante la ejecución, por la suma de \$68.260.411 por concepto de retroactivo pensional integrado por el reajuste pensional reconocido en la Resolución RDP056056 de 2013, calculado a partir del 4 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2015; por el retroactivo pensional reconocido en la Resolución RDP 056050 de 2013 a partir del 1º de junio de 2015 y hasta la fecha en la cual se pague la obligación y por las costas del proceso ejecutivo. Decisión que fue confirmada

por esta Corporación el 3 de diciembre de 2019. (págs. 126 y 132, doc.01, carp01).

1.1.- AUTO RECURRIDO

Mediante auto adiado del 19 de enero de 2024, el Juzgado de conocimiento, declaró probado el pago total de la obligación y dispuso el archivo definitivo del proceso una vez ejecutoriada la providencia. (doc.58, carp01).

1.2.- RECURSO

Ejecutante

La apoderada de la parte ejecutante interpuso el recurso de apelación, subsidiario al de reposición, señalando que en el proceso la parte demandada alegó en su defensa el pago y tuvo la oportunidad de aportar todo el material probatorio para demostrarlo, pese a ello, el Juzgado, el 6 de septiembre de 2019 emitió sentencia desfavorable desestimando el pago y acogió las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal, por lo que no es de recibo que el despacho otorgue todas las garantías procesales a la parte demandada y que luego de haberse superado todas las actuaciones procesales, las cuales son preclusivas, se vuelva a insistir y se reabra una etapa procesal como fue el aporte de pruebas, la cual ya había precluido y la demandada la pretermitió.

Añadió que la entidad demandada mediante memorial aportado al despacho el 20 de marzo de 2020, presentó objeción a la liquidación de crédito, reconociendo que efectivamente adeudaba \$56.537.566, por lo que el juzgado al declarar probado el pago total desconoce lo manifestado por la accionada, omitiendo tal confesión, no obstante haberse agotado las etapas procesales, por lo que solicita se verifique las sumas debidas por la entidad demandada, actualizando la liquidación del crédito y en su defecto ordenando el pago de las sumas adeudadas. (doc.60, carp.01)

Por medio de auto del 31 de enero del año en curso, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, resolvió no reponer el auto atacado y conceder el recurso de apelación. (doc.61, carp.01)

1.3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos la apoderada de la **UGPP**, refirió que a través de la Resolución RDP 56050 del 11 de diciembre de 2013, se reliquidó la pensión de vejez del ejecutante en cuantía de \$4.752.596, que para 2014 se adeudaba una mesada pensional de \$5.363.580 y no de \$6.164.980, aplicados los descuentos en salud y fondo de solidaridad, que el certificado del FOPED que aporta da cuenta de los pagos realizados mes a mes y del mismo se desprende que la entidad no debe diferencias de mesadas, solicitando la terminación del proceso (doc.03, carp.02)

Por su parte, la apoderada de la parte **ejecutante** insiste en los argumentos presentados en la sustanciación del recurso, a fin de que se revoque el auto y como consecuencia, se ejecute y pague lo adeudado por la demandada. (doc.04, carp.02)

2.- CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación **por la parte ejecutante**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO:

El problema jurídico a dirimir, radica en determinar

¿Si es procedente revocar el auto por medio del cual el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de pago total de la obligación y consecuentemente la terminación del proceso, para lo cual habrá de establecerse, si en efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, canceló el reajuste de las mesadas pensionales adeudadas al señor Francisco Octavio Barrera Jiménez, en los términos dispuestos en el mandamiento de pago librado el 17 de junio de 2015 ?

2.2.- TESIS

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, ha cancelado la totalidad de las mesadas pensionales con el reajuste ordenado judicialmente al señor Francisco Octavio Barrera Jiménez, en los términos dispuestos en el mandamiento de pago, razón por la cual deberá confirmarse el auto objeto de apelación.

2.3.- PREMISAS NORMATIVAS

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.

A su turno, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”.

Tratándose de obligación de dar, el artículo 424 ibídem prevé:

“ARTÍCULO 424. EJECUCIÓN POR SUMAS DE DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe. Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma”.

En igual sentido, el artículo 442 del Código General del Proceso, establece:

“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida”.

Bajo este marco normativo, quien es condenado judicialmente al pago de una obligación, solo puede exonerarse de su cumplimiento si acredita que la misma se ha extinguido por cualquiera de las formas legales.

2.4.- CASO CONCRETO

Partiendo del disenso formulado por la apoderada del ejecutante, corresponde a la Sala determinar si en efecto la entidad ejecutada canceló al señor Francisco Octavio Barrera Jiménez, los reajustes por mesadas pensionales en los términos dispuestos en el mandamiento de pago proferido el 17 de junio de 2015.

Bajo el anterior hilo conductor, se tiene que en mandamiento de pago se tomó como valor de la mesada pensional que debía percibir el ejecutante, en concordancia con la sentencia que fundamenta la ejecución, el siguiente:

AÑO	VALOR MESADA
2008	\$4.752.502
2009	\$5.117.023
2010	\$5.219.364
2011	\$5.384.818
2012	\$5.585.671
2013	\$5.721.962
2014	\$5.832.968
2015	\$6.046.932

Encontrándose que el retroactivo por reajuste pensional correspondiente a las mesadas causadas entre el 04 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2015, ascendió a la suma de \$68.260.411, y en igual sentido, se libró orden de pago por el retroactivo que, por concepto de reliquidación o reajuste de la mesada pensional, se siguiera causando a partir del 1° de junio de 2015.

Pues bien, la entidad ejecutada mediante Resolución RDP 056050 del 11 de diciembre de 2013, ordenó reliquidar la pensión de vejez del señor Barrera Jiménez, elevando la cuantía a la suma de \$4.752.596, a partir del 1° de enero de 2008, con efectos fiscales a partir del 4 de septiembre de 2010 por prescripción trienal (págs. 180-183 doc.02, carp.01), igualmente, conforme a la

citada resolución, se ordenó el pago de la suma de **\$50.372.096.30** por concepto de retroactivo causado desde el 4 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014, **previa aplicación de los descuentos de ley**, señalando la entidad que a partir del 1° de enero de 2014, el accionante fue incluido en nómina con el valor de la mesada pensional liquidada en los términos de que trata la ejecución. (págs. 135-137, doc01, carp.01).

Con este norte la UGPP aportó pantallazo correspondiente a comprobante de nómina del accionante del mes de enero de 2014, que da cuenta de lo siguiente:

BANCOLOMBIA		CUPON DE PAGO No. 89469		
2415263239		MES 1	AÑO 2014	PAGUESE HASTA 27/04/2014
CIUDAD/DPTO RIONEGRO(615) / ANTIOQUIA(5)		SUCURSAL RIONEGRO(24) CALLE 37 # 53 49 PARQUE PRINCIPAL		
IDENTIFICACION CC 3375619		NOMBRE PENSIONADO BARRERA JIMENEZ FRANCISCO OCTAVIO		
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS	
10	JUBILACION NAL	6,164,980.23		
23	RELIQUIDACION AL 12%	42,871,869.22		
25	RELIQUIDACION MSADA ADICIONAL 0%	7,500,221.00		
7	PROGR. COMFENALCO-ANTIOQUIA		5,883,700.00	
267	FONDO SOLIDARIDAD		61,600.00	
156	REINTEGROS NACION DESA		6,531,640.00	
Línea de Atención al Pensionado:		56,537,070.45	12,476,940.00	
Carrera 20 Nro. 39-32 Bogotá		NETO A PAGAR	44,060,130.45	
3389950Página Web: www.fopep.gov.co - E-mail: contactenos@fopep.gov.co				

Advirtiendo la Sala, que, como lo alega la apoderada recurrente, en su momento el juzgado sostuvo que dicho comprobante no daba cuenta de que efectivamente se hubiera realizado el pago, razón por la cual ordenó continuar la ejecución en los términos del mandamiento de pago, decisión que fue confirmada por esta Corporación, pues, en efecto, no se acreditó fehacientemente que el pago se hubiera materializado. No obstante, el juzgado de conocimiento dispuso en diversas oportunidades oficiar a Bancolombia S.A., a fin de que allegara el historial de giros realizados por al UGPP al accionante, obrando la respuesta a uno de dichos requerimientos en el anexo 54 del expediente digital, con la cual se corrobora que en efecto el 26 de enero

de 2014, la UGPP canceló al actor la suma de \$44.060.13,45, tal y como se había informado.

Ahora es cierto que el valor cancelado por la ejecutada resulta inferior al ordenado por el Juzgado en el mandamiento de pago, sin embargo, también es claro que el retroactivo liquidado en dicha oportunidad por valor de \$68.260.411, comprendía el reajuste pensional calculado hasta 15 de mayo de 2015 y el liquidado por la entidad, en el pago antes referenciado, lo fue hasta el 31 de diciembre de 2014.

En esta perspectiva, realizado el cálculo de los dineros que debió cancelar la UGPP al ejecutante al 31 de diciembre de 2014, partiendo de una mesada pensional inicial para el año 2008 de \$4.752.502 y para el año 2010 de \$5.219.364, se obtiene los siguientes valores:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2008	7,67%	\$ 3.878.065	\$ 4.752.506	\$ 874.441		\$ -
2009	2,00%	\$ 4.175.513	\$ 5.117.023	\$ 941.511		\$ -
2010	3,17%	\$ 4.259.023	\$ 5.219.364	\$ 960.341	4 m, 26 d	\$ 4.673.659
2011	3,73%	\$ 4.394.034	\$ 5.384.818	\$ 990.784	14	\$ 13.870.971
2012	2,44%	\$ 4.557.931	\$ 5.585.671	\$ 1.027.740	14	\$ 14.388.358
2013	1,94%	\$ 4.669.145	\$ 5.721.962	\$ 1.052.817	14	\$ 14.739.434
TOTAL						\$ 47.672.422

Conforme a la liquidación precedente el retroactivo por concepto de reajuste pensional causado entre el 4 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, asciende a **\$47.672.422** y acorde al comprobante de nómina antes referenciado, la entidad reconoció por dicho concepto la suma de **\$50.372.090.22**, al cual le efectuó los respectivos descuentos de ley, por lo que se concluye que la entidad, en efecto, canceló debidamente la mesada pensional del accionante hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ahora, conforme al mandamiento de pago, el valor de la mesada pensional a partir del año 2014, es el siguiente:

2014	\$ 5.832.968	2019	\$ 7.332.210
2015	\$ 6.046.454	2020	\$ 7.610.834
2016	\$ 6.455.799	2021	\$ 7.733.369
2017	\$ 6.827.008	2022	\$ 8.167.984
2018	\$ 7.106.232	2023	\$ 9.239.624

Y de la respuesta allegada por Bancolombia, se tiene que la entidad ha cancelado al señor Barrera Jiménez, los siguientes valores:

2014	\$5.363.580,23	2019	\$6.819.559,97
2015	\$5.623.718,51	2020	\$7.078.743,25
2016	\$6.004.463,38	2021	\$7.192.652,35
2017	\$6.349.701,02	2022	\$7.596.905,99
2018	\$6.609.419,10	2023	\$8.593.643,26

Importa señalar que la diferencia de los valores pagados respecto a los indicados en el mandamiento de pago, se explican porque la entidad pagadora, como cualquier administradora de pensiones, descuenta un 12% de cada mesada pensional con destino al sistema de seguridad social en salud, de ahí que, a los valores antes referenciados y efectivamente consignados a órdenes de Bancolombia y en favor del ejecutante, debe adicionársele ese porcentaje del 12%, para conocer el valor total de la mesada pensional, como se relaciona a continuación:

AÑO	VALOR PAGADO	12%	TOTAL
2014	\$ 5.363.580,23	\$ 643.629,63	\$ 6.007.209,86
2015	\$ 5.623.718,51	\$ 674.846,22	\$ 6.298.564,73
2016	\$ 6.004.463,38	\$ 720.535,61	\$ 6.724.998,99
2017	\$ 6.349.701,02	\$ 761.964,12	\$ 7.111.665,14
2018	\$ 6.609.419,10	\$ 793.130,29	\$ 7.402.549,39
2019	\$ 6.819.559,97	\$ 818.347,20	\$ 7.637.907,17
2020	\$ 7.078.743,25	\$ 849.449,19	\$ 7.928.192,44
2021	\$ 7.192.652,35	\$ 863.118,28	\$ 8.055.770,63
2022	\$ 7.596.905,99	\$ 911.628,72	\$ 8.508.534,71
2023	\$ 8.593.643,26	\$ 1.031.237,19	\$ 9.624.880,45

De lo anterior, se constata que la UGPP canceló valores incluso superiores a los ordenados en el mandamiento de pago, de donde colige la Sala que a la fecha no adeuda al ejecutante suma alguna por concepto de reajuste de mesada

pensional conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago, razón por la cual deberá confirmarse el auto objeto de apelación.

Ahora, relieves la Sala que no es posible atender el reparo presentado por la apoderada de la parte ejecutante, pues la entidad ejecutada puede acreditar el cumplimiento de la obligación en cualquier etapa del proceso, destacándose que en el caso concreto para el momento en que se presentan las excepciones por la ejecutada, ya se venía reconociendo al accionante la mesada pensional reliquidada y ya se le había cancelado el retroactivo pensional que se generó a 31 de diciembre de 2013, pero no fue aportada la prueba de ello al proceso.

Incumbe memorar que, en el auto del 03 de diciembre de 2019, que resuelve el recurso de apelación que declara no probada la excepción de pago, se dijo:

“ No obstante, tal como lo señala la funcionaria de primer grado, no se aporta prueba, ni de la liquidación de la indexación, que presuntamente corresponde a la diferencia entre la liquidación del retroactivo por mesadas, \$50.372.096 y el que se aduce cancelado, \$56.537.070, ni la constancia de consignación, ni del historial de pagos de la mesada pensional del actor, ni del valor actual de la misma, que permita a la justicia laboral establecer que realmente fue pagado el retroactivo y que el actor se encuentra percibiendo el valor reliquidado de su mesada desde enero de 2014.

A lo anterior se suma que la parte accionante promovió la presente acción judicial afirmando el no pago, el 21 de julio de 2014, esto es, con posterioridad a enero de 2014, fecha en la cual se aduce se produjo la inclusión en nómina del retroactivo, negación indefinida que invierte la carga de la prueba y que fue ratificada en memorial del 17 de julio de 2017 al describir el traslado de las excepciones, por lo tanto, al no existir una prueba fidedigna del pago y bajo los principios de buena fe y lealtad procesal que se presumen del demandante, más aún cuando fungió como funcionario judicial, debe tenerse por no realizado el pago mientras la ejecutada no pruebe lo contrario.”

Así las cosas, en esta etapa del proceso logró verificarse el pago, con la certificación emitida por la entidad financiera Bancolombia S.A. y por tanto lo procedente es así declararlo.

Finalmente, debe indicarse que llama la atención de la Sala, la oposición presentada por la apoderada del ejecutante en el trámite del proceso en torno a que se declare el pago y el cumplimiento de la obligación por parte de la UGPP, cuando la misma apoderada desde el escrito mediante el cual se pronunció frente a la objeción a la liquidación del crédito allegada por la ejecutada, manifestó:

“...frente al requerimiento que antecede por el Despacho judicial, informo que las únicas personas que pueden indicar con precisión si las sumas de dinero allí descritas ya fueron canceladas son: el demandante, el apoderado que inició este proceso, y la entidad demandada. El demandante, señor Barrera Jiménez, padece múltiples afecciones de salud, entre ellas: Deterioro Cognitivo y Trastorno de Ansiedad, situación que impide dar respuesta de manera clara a su interrogante, pues se encuentra desorientado en tiempo, modo y lugar...Por su parte el apoderado inicial del señor Barrera Jiménez, quien fue el Dr. LUIS FERNANDO MUÑOZ BENITEZ, tal cual como se ve reflejado en el plenario, incoó la demanda siendo muy claro en las pretensiones y en la liquidación que insertó en el escrito de demanda. No obstante, el Despacho libró mandamiento con fecha posterior al supuesto pago referido por la entidad demandada, ordenando el pago de una suma inferior a la pretendida, sin que fuera recurrido el auto por esta parte. Posteriormente mi representado revoco el poder ha dicho togado sin que a la fecha haya sido posible contactarlo”. (pág.184, doc.01, carp.01)

De lo que surge claro, que el extremo activo no confirmó ni negó el pago y en tal sentido la apoderada expresó no tener certeza si su representado recibió o no los valores correctos, situación que se reafirma en la sustentación del recurso de apelación que se estudia, pretendiendo se tenga por precluida la oportunidad para acreditar el pago y se verifiquen las sumas debidas por la entidad demandada, actualizando la liquidación de crédito.

De consiguiente se impone CONFIRMAR el auto impugnado. Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante por haberse despachado desfavorablemente el recurso de alzada, se fija como agencias en derecho la suma de \$650.000, en favor de la ejecutada.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto proferido el 19 de enero de 2024, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por el señor Francisco Octavio Barrera Jiménez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$650.000, en favor de la ejecutada.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

(Sin firma por ausencia justificada)



DIEGO FERNANDO SALAS RONDON

El presente auto fue notificado en los Estado N° 032 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 23 de febrero de 2024

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario